

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TREINTA DE FAMILIA**

**Bogotá D. C., nueve (09) de febrero de dos mil veintiuno (2021)**

**Rad: 11001-31-100-30-2018-00203-00**

**Clase de proceso: Medida de Protección**

Encontrándose el proceso al despacho, se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho, contra la decisión adoptada en diligencia del por la Comisaría 8 de Familia Kennedy 3 de esta ciudad, en el proceso de la referencia.

**ANTECEDENTES**

1.- El 20 de mayo de 2020 la Comisaría Octava de Familia Kennedy 3 de esta ciudad, admitió y avocó la solicitud de trámite de incumplimiento de la acción de violencia intrafamiliar, cito a la audiencia de que trata el art. 7 de la ley 575 de 2000, ordeno la notificación a las partes, y finalmente las advertencias legales.

2.- En diligencia del 18 de junio de 2020, se fija el litigio, se efectúa el control de legalidad y se dispone fijar como nueva fecha el 22 de julio de 2020. Debidamente notificadas las partes, se efectuó la audiencia pública prevista en el Art. 4 de la Ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000 el 23 de julio de 2018 a la que comparecieron las partes y sus apoderados judiciales; se pronunció la Comisaría frente a la prueba documental considerando que no es pertinente, conducente ni útil; decisión que fue objeto de reposición; para luego ser objeto de apelación por parte del profesional del derecho que representa al incidentado.

**CONSIDERACIONES**

Siendo la apelación un recurso que está vinculado directamente con las dos instancias, por cuanto el juez superior decidirá si le asiste razón a quien lo interpuso, la ley determina la procedibilidad del mismo, de acuerdo con lo dispuesto expresamente; y al referirse a los autos indica de manera taxativa cuáles son los apelables.

Descendiendo al caso en estudio, se observa que el apoderado de la parte incidentada interpuso recurso de reposición contra la decisión adoptada por la Comisaría el 22 de julio de 2020, mediante la cual resolvió negar el decreto de la prueba documental y al mantener incólume la decisión, interpuso recurso de apelación que fue concedido por la autoridad administrativa.

Decisión que si bien se encuentra dentro de aquellas que contempla la ley como susceptible de dicho recurso, pues se encuentra enlistado en el num. 3 del artículo 321 del C.G. del P., que establece: "...el que niegue el decreto o la práctica de pruebas", tratándose de este tipo de asuntos, se encuentran reglamentados en norma especial, como son el Decreto 4799 del 20 de

diciembre de 2011, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.

De otro lado, advierte el Despacho que los Jueces de Familia en los procesos de violencia intrafamiliar, únicamente tienen competencia para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las **decisiones definitivas** sobre una medida de protección y el trámite de consulta dispuesto para las sanciones impuestas dentro de los incidentes de incumplimiento (art. 18 Ley 294 de 1996 modificado por el 12 Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991), ello teniendo en cuenta que las leyes que regulan la materia consagran un trámite especial, preferente, sumario y expedito.

Máxime cuando nuestro ordenamiento positivo ha establecido el criterio de la taxatividad de aquellas decisiones susceptibles de recursos de apelación, determinándolas claramente, de tal manera que no puedan confundirse con otras a las cuales no les otorga este carácter.

En esta materia, ni la analogía ni las interpretaciones extensivas pueden sustraerse a dicho ordenamiento, ni las partes pueden apartarse de éste invocándolas.

Sobre el particular la jurisprudencia ha sostenido que: *“Tal enumeración es un numerus clausus, no susceptible de extenderse, ni aún a pretexto de analogía, por el juez a casos no contemplados en la ley”*.<sup>1</sup>

Visto lo anterior, no podrá el Juez aplicar dicha normatividad, ni efectuar analogía alguna a casos no contemplados expresamente en la ley, como acaece en el presente asunto, toda vez que la regulación del trámite de violencia intrafamiliar no consagra disposición alguna respecto de los recursos de alzada, como mal lo pretende el recurrente.

En esas condiciones, se concluye que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fecha 22 de julio de 2020, debe ser resuelto por la autoridad competente, pues como bien se dijo los Jueces de Familia en los procesos de violencia intrafamiliar, únicamente tienen competencia para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las **decisiones definitivas**.

Por lo expuesto, **el JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D. C.,**

#### **RESUELVE:**

**1.-INADMITIR** el recurso de apelación concedido por la Comisaria de Familia, respecto del proveído de fecha 22 de julio de 2020.

**2.-DEVOLVER** las diligencias al despacho de origen, para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE,**

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia – Sala Civil M.P. Pedro Lafont Pianetta auto de 24 de junio de 1988.

**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-  
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**3cc18032894a6a9667a0c1a1deffd4d279981356220c6b910cb3347a3bbd7b34**

Documento generado en 09/02/2021 02:51:27 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**